



RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº **429** – 2017 – GRJ/GRI

Huancayo, **27 NOV 2017**

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTOS:

El Informe Legal N° 1106-2016-GRJ/ORAJ, la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 408-2016-GRJ/GRI, Memorando N° 1592-2016-GRJ/SG, y el Informe Técnico N° 120-2017-GRJ/ORAF/ORH/STPAD, y los datos generales del proceso:

Identificación del servidor civil (procesado).

NOMBRE	CARGO	DESDE	HASTA	DIRECCION	RESOLUCION	DNI
Ing. CASTILLO CARDENAS, José Luis	Director Regional de Transportes y Comunicaciones	01/01/2015	CONTINUA	Jr. Libertad N° 1197-El Tambo - Hyo.	RER N° 016- 2015-GR- JUNIN/PR	41171629

CONSIDERANDO:

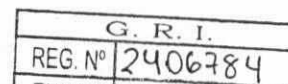
DE LOS HECHOS:

Que, según se desprende de la Resolución Gerencial General Regional N° 408-2016-GRJ/GGR, de fecha 30 de Noviembre de 2016, los cargos imputados en contra del Ing. José Luis Castillo Cárdenas, en su condición de Director Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín, se sustenta en lo siguiente:

"(...) CONSIDERANDO (...)

Que, conforme fluye de los actuados, mediante Resolución Directoral Regional N° 27-2016-GRJ-DRTC/DR de fecha 18 de enero del 2016, se resuelve declarar improcedente la solicitud formulada por el impugnante, por haber cumplido los requisitos previstos en el artículo 55° del Decreto Supremo N° 017-2009-MTC. Por consiguiente, con fecha 28 de enero del 2016, interpone recurso de reconsideración contra ésta última resolución, y siendo resuelta posteriormente mediante Resolución Directoral Regional N° 0212-2016-GRJ-DRTC/DR de fecha 02 de marzo del 2016, declarando fundado dicho recurso, y otorgándosele la autorización solicitada; (...)

Que, con fecha 25 de octubre del 2016, el administrado advierte que se le reconozca y otorgue su derecho de defensa contemplado en el numeral 14) del artículo 139° de la Constitución, ya que ha sido vulnerado en el procedimiento administrativo seguido en su contra, por presunto incumplimiento del inicio del servicio autorizado, de acuerdo a lo prescrito en numeral 58.3 del artículo 58° y numeral 49.3.8 del artículo 49° del Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, por lo cual en el acto administrativo contenido en la Resolución Directoral Regional N° 680-2016-GRJ-DRTC/DR de fecha 31 de mayo del 2016, que resuelve cancelar su autorización para prestar el servicio de transporte fue emitida sin antes haberse otorgado oportunidad para presentar sus descargos o alegatos, conforme le conoce el numeral 161.2 del artículo 161° de la Ley N° 27444, tampoco se ha respetado la secuencia del procedimiento sancionador como consecuencia de un incumplimiento, reconocidos en los artículos 95° y 103° del mencionado Decreto Supremo. Asimismo indica que la Dirección de Transportes y Comunicaciones, actuó de la manera discriminatoria y dolosa, por cuanto en procedimientos





similares ha otorgado oportunidad a los administrados con la finalidad que puedan presentar sus descargos, como ocurre en el caso del Resolución Directoral Regional N° 455-2016-GRJ-DRTC/DR de fecha 15 de abril del 2016, seguido contra la Empresa de Transportes y Turismo PALOTOUR S.C.R.L. que les brinda dicha oportunidad de hacer valer sus derechos de defensa y debido procedimiento. Por tanto solicita la nulidad de Oficio de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 293-2016-GRJ/GRI, de fecha 11 de octubre de 2016. (...)

Que, Revisado el procedimiento administrativo, se logra apreciar que la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, actuó de manera negligente por no haber brindado oportunidad al administrado de poder ejercer su derecho de defensa frente al presunto incumplimiento incurrido, vulnerándose flagrantemente el numeral 161.2 del artículo 161° de la Ley N° 27444, que señala: **"en los procedimientos administrativos sancionadores, o en actos de actos de gravamen para el administrado, se dicta resolución sólo habiéndolo otorgado un plazo perentorio no menor de cinco días para presentar sus alegatos o las correspondientes pruebas de descargo"**, por tanto, para declarar la nulidad de un acto administrativo, previamente, debe otorgarse un plazo perentorio no menor de cinco días al administrado para presentar sus alegatos o las correspondientes pruebas de descargo, éste Criterio que lo entienden también el doctrinario Morín Urbina, al señalar: **"(...) deriva razonablemente del principio del debido procedimiento administrativo y de los Artículos 3.5, 161.2, 187.2 que ninguna autoridad administrativa podrá dictar una anulación, sin otorgar anteladamente audiencia al interesado para que pueda presentar sus argumentos a favor de la sostenibilidad del acto que le reconoce derecho o intereses. Adicionalmente a ello, la resolución anulatoria del acto que le reconoce derecho o intereses. Adicionalmente a ello, la resolución anulatoria debe ser notificada a los administrados concernidos a fin de que tengan la posibilidad de controlar su legalidad."**; por lo tanto queda claramente establecido que antes de dictarse un acto administrativo que cause agravio al administrado, previamente debe otorgársele oportunidad para que pueda hacer valer su derecho de defensa mediante la presentación de descargos o alegatos, tal omisión vulneraría el Derecho de Defensa y Debido Procedimiento.



En ese mismo sentido de autos se logra apreciar que la Resolución Directoral Regional N° 680-2016-GRJ-DRTC/DR de fecha 31 de mayo del 2016, resuelve cancelar la autorización otorgada al administrado, por haber incumplido lo prescrito por el numeral 49.3.8 del artículo 49 y el numeral 58.3 del artículo 58° y del Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, las mismas que se encuentran relacionadas a la demora en el inicio de operaciones por lo tanto constituyéndose una causa de cancelación. Sin embargo previa a la cancelación, como causal de incumplimiento debió tenerse en cuenta lo prescrito por el artículo 95° del mismo cuerpo normativo, que señala: **"El incumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia es de una sola clase y determina la sanción que corresponda, como consecuencia de un procedimiento administrativo sancionador."**; en concordancia con lo prescrito por el numeral 96.1 del artículo 96° del referido Decreto Supremo, que luego de interpretación sistemática se logra entender que previamente a una sanción se requiere de un procedimiento administrativo sancionador, otorgándose un plazo para que el administrado pueda subsanar la omisión cometida o corregir el incumplimiento. Conforme regula el numeral 103.1 artículo 103° del mismo cuerpo legal, sin que se le pueda eximir de la responsabilidad administrativa cometida. (...)

Que, sin perjuicio de lo mencionado precedentemente se evidencia que se ha incurrido en el supuesto de nulidad previsto en el numeral 2) del Artículo 10° de la Ley N° 27444, al haberse observado que existen vicios que causan su nulidad de pleno derecho, conforme se desarrolla en los numerales 202.1 y 202.2 del artículo 202° de la Ley N° 27444, que establece, en cualquiera de los casos enumerados en el referido artículo 10°, se producen los vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho, siendo los siguientes: **"1).- La contravención a la Constitución, a las leyes o a las norma reglamentarias; 2).- El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez (...)"**, por lo tanto resulta necesario remitirnos a los regulados por el artículo 3° de la misma Ley, establece que son requisitos de validez de los actos administrativos, la competencia, el objeto o contenido, la finalidad pública, motivación, procedimiento regular. Entendiéndose que antes de la emisión del acto



administrativo, se debió cumplir con todas las acciones que requiere el procedimiento administrativo, previo para su generación, hecho que ha sido vulnerado al no haberse respetado el derecho de defensa y debido procedimiento, por lo tanto debe declararse la nulidad de oficio de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 293-2016-GRJ/GRI de fecha 11 de octubre del 2016, Resolución Directoral Regional N° 680-2016-GRJ-DRTC/DR de fecha 31 de mayo del 2016 y todo lo actuado, hasta la etapa que se le notifique oportunamente los cargos que se le imputan que dará inicio del procedimiento administrativo sancionador.(...)

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- declarar **LA NULIDAD DE OFICIO** de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 293-2016-GRJ/GRI de fecha 11 de octubre del 2016 y la Resolución Directoral Regional N° 680-2016-GRJ-DRTC/DR de fecha 31 de mayo del 2016, al haberse observado que existen vicios que causan su nulidad de pleno derecho, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa del a presente.

ARTÍCULO SEGUNDO.- RETROTRAER el procedimiento administrativo hasta la etapa procedimental, donde el Órgano competente de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, notifique las imputaciones encontradas en contra de la Empresa de Transportes BACILIO S.R.L., y se dé inicio al procedimiento administrativo sancionador en su contra, conforme las normas citadas en la parte considerativa del presente.

ARTÍCULO TERCERO.- REMÍTASE copias de los actuados a la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del GRJ y a la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Dirección Regional de Transportes, para el deslinde de responsabilidades del funcionario y/o servidor implicado, en la emisión de la Resolución Directoral Regional N° 680-2016-GRJ-DRTC/DR de fecha 31 de mayo del 2016, generando responsabilidad administrativa, conforme se encuentra prescrito por el numeral 12.3 del artículo 12° de la Ley N° 27444. (...)"

DE LOS ANTECEDENTES:

De los antecedentes y documentos que dieron origen al inicio del proceso:

Que, conforme se desprende de la Resolución Gerencial General Regional N° 408-2016-GRJ/GGR, de fecha 30 de noviembre de 2016, en el tercer artículo de la parte resolutive, señala: "**ARTÍCULO TERCERO.- REMÍTASE** copias de los actuados a la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del GRJ y a la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Dirección Regional de Transportes, para el deslinde de responsabilidades del funcionario y/o servidor implicado, en la emisión de la Resolución Directoral Regional N° 680-2016-GRJ-DRTC/DR de fecha 31 de mayo del 2016, generando responsabilidad administrativa, conforme se encuentra prescrito por el numeral 12.3 del artículo 12° de la Ley N° 27444. (...)"

Análisis de los documentos y medios probatorios que sirven de sustento para la toma de decisión:

La Resolución Directoral Regional N° 27-2016-GRJ-DRTC/DR, de fecha 18 de enero de 2016, en la cual se resuelve declarar improcedente la solicitud formulada por el impugnante, por haber cumplido los requisitos previstos en el artículo 55 del Decreto Supremo N° 017-2009-MTC (fs. 128-131); por consiguiente, con fecha 28 de enero de 2016, interpone recurso de reconsideración contra ésta última resolución, y siendo resuelta posteriormente mediante **Resolución Directoral Regional N° 0212-2016-GRJ-DRTC/DR** de fecha 02 de marzo del 2016, declarando fundado dicho recurso, y otorgándosele la autorización solicitada (fs. 151-154).





La Resolución Directoral Regional N° 680-2016-GRJ-DRTC/DR, de fecha 31 de mayo de 2016, en la cual se dispone la cancelación de la Resolución Directoral Regional N° 0212-2016-GRJ-DRTC/DR de fecha 14 de marzo de 2016. (fs. 155-156)

El Recurso de apelación, de fecha 14 de setiembre de 2016, interpuesto por Dennis Benjamín Bacilio Segura, representante de la Empresa de Transportes BACILIO S.R.L., contra lo resuelto en la resolución antes aludida. (fs. 239-247).

La Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 293-2016-GRJ/GRI, de fecha 11 de Octubre de 2016, en la cual se resuelve declarar improcedente el recurso antes aludido, por haberse interpuesto de manera extemporánea. (fs. 258-259).

TIPIFICACION DE LA FALTA:

Se debe tener en cuenta; que en materia sancionadora el **principio de legalidad** impide que se pueda atribuir la comisión de una falta si ésta no está previamente determinada en la ley, y también prohíbe que se pueda aplicar una sanción si ésta no está determinada por la ley. Como lo ha expresado el Tribunal Constitucional (Cfr. Expediente N.° 010-2002-AI/TC), este principio impone tres exigencias: la existencia de una ley (*lex scripta*), que la ley sea anterior al hecho sancionado (*lex praevia*), y que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado (*lex certa*).

Los PAD instaurados desde el 14 de septiembre de 2014, por los hechos cometidos a partir de dicha fecha, se regirán por las normas procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario previstas en la Ley N° 300057 y su Reglamento.

Que sobre los hechos imputados al involucrado, constituiría faltas de carácter administrativo; que no es más ***"Toda acción u omisión voluntaria o no que contravengan las obligaciones, prohibiciones y demás normas sobre los deberes de funcionarios y servidores"***; en el presente caso, se habría vulnerado el artículo 85, letra a), d) y q) - Ley 30057 - Ley de Servicio Civil, que prescribe:

Artículo 85, letras a), d) y q) - Ley 30057-Ley de Servicio Civil	Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo: a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley su Reglamento, d) La negligencia en el desempeño de las funciones, y q) Las demás que señale la ley".
--	--

Norma que resulta concordante con lo establecido para el caso, en el acápite 98.3 del art. 98° del Reglamento de la Ley N°30057, aprobado por D.S. N° 040-2014-PC, que prescribe: 98.3. *La falta por omisión consiste en la ausencia de una acción que el servidor o ex servidor civil tenía obligación de realizar y que estaba en condiciones de hacerlo.*

Esto al haber transgredido:

La Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
 - 1.1. *Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.*
 - 1.2. *Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una*



decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. (...)

- 1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

Artículo 10.- "Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

- 1. La Contravención a la Constitución, la las leyes o a las normas reglamentarias".**

Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad

11.3 La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido.

Artículo 75.- Deberes de las autoridades en los procedimientos

Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes: (...)

1. Actuar dentro del ámbito de su competencia y conforme a los fines para los que les fueron conferidas sus atribuciones.
2. Desempeñar sus funciones siguiendo los principios del procedimiento administrativo previstos en el Título Preliminar de esta Ley. (...)

Artículo 234.- Caracteres del procedimiento sancionador Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por: (...)

3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo la calificación de las infracciones que tales hechos pueden construir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia. (...).

Artículo 235.- Procedimiento sancionador

Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las siguientes disposiciones:

3. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la que debe contener los datos a que se refiere el numeral 3 del artículo precedente para que presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación.

Artículo 239.- Faltas Administrativas (...)

Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente con amonestación, suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con que hayan actuado, en caso de: (...)

4. Resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia.

Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín (ROF)

ARTÍCULO 85o.- Naturaleza y funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (...) Tiene las funciones siguientes:

- a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de transportes de la región, de conformidad con las políticas nacionales y los planes sectoriales.





Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (ROF)

ARTÍCULO 12o.- (...) Son funciones del Director Regional: (...)

b) *Dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento de los órganos de la Dirección Regional.*

(...)

f) *Resolver en primera instancia administrativa los asuntos de su competencia. (...)*

Los hechos investigados, se rigen por las reglas procedimentales previstas en la Ley 30057, Ley de Servicio Civil (LSC), por cuanto el Proceso Administrativo Disciplinario (PAD), se ha instaurado después del 14 de setiembre de 2014, fecha en que ha entrado en vigencia ésta ley.

El Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 30057, permite al Secretario Técnico (ST), investigar de oficio cuando existan indicios razonables sobre la comisión de una falta.

SUBSUNCION DE LOS HECHOS A LA NORMA.-

En la Sentencia N.º 090-2004-AA/TC, el Tribunal ha expresado que: "(...) el deber de motivar las decisiones administrativas alcanza especial relevancia cuando en las mismas se contienen sanciones". En la medida que una sanción administrativa supone la afectación de derechos, su motivación no sólo constituye una obligación legal impuesta a la Administración, sino también un derecho del administrado, a efectos de que éste pueda hacer valer los recursos de impugnación que la legislación prevea, cuestionando o respondiendo las imputaciones que deben aparecer con claridad y precisión en el acto administrativo sancionador. De otro lado, tratándose de un acto de esta naturaleza, la motivación permite a la Administración poner en evidencia que su actuación no es arbitraria sino que está sustentada en la aplicación racional y razonable del derecho y su sistema de fuentes.

Para mejor resolver los hechos imputados se debe tener en cuenta.-

La STC N° 0090-2004-AA/TC, emitida por el Tribunal Constitucional; en cuanto al interés público, donde se ha reconocido que se trata de un concepto jurídico con contenido y extensión variable en atención a las circunstancias, que es concreta y específica cuando la administración actúa en el campo de sus potestades, teniendo como requisito sine qua non «condición sin la cual no» la motivación de sus decisiones, quedando excluida toda posibilidad de arbitrariedad, puesto que la administración está obligada a justificar las razones que imponen determinada decisión, de una manera concreta y específica; por ello, conviene citar al tratadista Juan Carlos Morón Urbina que sostiene: ***"Si como se sabe la Administración está sujeta al principio de legalidad, y ello constituye antecedente necesario para cualquier interés público de su actuación, no se podría entender como un acto reconocidamente inválido, no podrá nunca satisfacer el interés que anima a la Administración. Por ello que la posibilidad de la anulación de oficio implica en verdad una vía para la restitución de la legalidad afectada por un acto administrativo"***

Compulsación de la prueba:

Que, haciendo un análisis lógico jurídico de la precalificación de los hechos y los medios de prueba incorporados válidamente al expediente administrativo, la falta disciplinaria imputable al administrado **Ing. José Luis Castillo Cárdenas**, en su condición de Director Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional Junín; sería por presunta irregularidad administrativa por acción y omisión en el ejercicio de sus



funciones; por cuanto, al haber emitido la Resolución Directoral Regional N° 680-2016-GRJ-DRTC/DR, de fecha 31 de mayo de 2016, que resuelve cancelar la autorización otorgada a favor de la Empresa de Transportes BACILIO S.R.L. para prestar servicio especial de transportes de pasajeros Ámbito Regional, lo hizo sin las garantías de un debido procedimiento, que exige el inciso 3 del artículo 234, e inciso 3 del artículo 235, ambos de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, esto en relación al ordenamiento del procedimiento sancionador; por ende, inicialmente se debió haber notificado al representante de ésta empresa los cargos que se le imputa, a fin de garantizarse su derecho de defensa, lo que en ningún momento se hizo; situación que ha conllevado a que se lesione el orden jurídico, con ello, el Principio de Legalidad. Por lo tanto, a través de la Resolución Gerencial General Regional N° 408-2016-GRJ/GGR, de fecha 30 de noviembre 2016, se ha resuelto declarar la nulidad de oficio de ésta resolución que es materia de cuestionamiento.

Por consiguiente, de haber actuado en forma diligente respetándose las garantías de un debido procedimiento, no se habría producido estos actos omisivos; que por el grado de jerarquía en relación a la falta cometida, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente; por ende, no ha salvaguardado los derechos e intereses de la Entidad, para así, los recursos públicos sean empleados austeramente; generándose con estos actos grave retraso institucional, al crearse suspicacias a una mala imagen a la Entidad y sus representantes. Situación que conllevaría a materializarse la comisión de las faltas descritas y la responsabilidad de éste imputado.



Possible sanción a la falta imputada.

Consecuentemente, estando a lo antes colegido; el administrado Ing. José Luís Castillo Cárdenas, como Director Regional de Transportes y Comunicaciones; si bien es cierto, su responsabilidad tendría sustento a la grave afectación a los bienes jurídicos protegidos por el Estado; como también por la función que desempeña en la Entidad, mayor sería su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente; sin embargo, por la forma, modo y circunstancias, de cómo se suscitaron los hechos imputados, y no apreciándose con exactitud la magnitud de los daños y perjuicios a la Entidad; la posible sanción a imponérsele sería **suspensión sin goce de remuneraciones**, conforme a lo establecido en los incisos a) y c) del artículo 87, e inciso b) del artículo 88°, ambos de la Ley N° 30057-Ley de Servicio Civil; y artículo 92° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM concordante con el artículo 230° inciso 3 de la del Procedimiento Administrativo General.

ORGANO INSTRUCTOR COMPETENTE:

Que, el Órgano Instructor Competente para disponer el Inicio del PAD; es el Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Junín.

PLAZO DE PRESENTACION DE DESCARGO:

Que, conforme al literal a) del artículo 106° y 111° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, el plazo para que los procesados presenten sus descargos en el proceso se deberá brindar a los procesados el plazo de cinco (5) días hábiles para que presenten sus descargos escritos ante el Órgano Instructor. Dicho plazo se computa desde el día siguiente de la comunicación que determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Asimismo, dicho plazo que puede ser prorrogable debiendo ser justificable.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PROCESADO:



Que, conforme al Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, son derechos y obligaciones de los servidores, los siguientes:

“Artículo 96.1. Mientras esté sometido a procedimiento administrativo disciplinario, el servidor civil tiene derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva y al goce de sus compensaciones. El servidor civil puede ser representado por abogado y acceder al expediente administrativo en cualquiera de las etapas del procedimiento administrativo disciplinario.

Artículo 96.2. Mientras dure dicho procedimiento no se concederá licencias por interés del servidor civil, a que se refiere el literal h) del Artículo 153 del Reglamento mayores a cinco (05) días hábiles.

Artículo 96.3. Cuando una entidad no cumpla con emitir el informe al que se refiere el segundo párrafo de la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley del Servicio Civil en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, la autoridad competente formulará denuncia sin contar con dicho informe.

Artículo 96.4. En los casos en que la presunta comisión de una falta se derive de un informe de control, las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario son competentes en tanto la Contraloría General de la República no notifique la Resolución que determina el inicio del procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa funcional, con el fin de respetar los principios de competencia y non bis in ídem.”;

Que, estando a lo recomendado por la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Junín y **estando a lo dispuesto por esta Gerencia Regional de Infraestructura**, y; en uso de las facultades y atribuciones otorgadas por la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria mediante Ley N° 27902, concordante con la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; y demás normas conexas;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APERTURAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra el siguiente servidor:

- ✓ **Ing. JOSE LUIS CASTILLO CARDENAS**, como Director Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional Junín, por haber incurrido en presuntas faltas administrativas, conforme lo establece Artículo 85° de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, precisados en los literales: **a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento; d) La negligencia en el desempeño de las funciones; y, q) las demás que señale la ley.**

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente acto administrativo al servidor comprendido en el procedimiento que se está instaurando, otorgándoles el plazo que señala el artículo 106° y 111° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM – Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, a fin de que efectúe los descargos que estime conveniente, garantizando así el derecho de defensa y el debido procedimiento.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR al Área de notificaciones el diligenciamiento de la presente Resolución, conforme a la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria mediante Decreto Legislativo N° 1029.

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

HYO. 27 NOV 2017

Antonieta S.R.
Abog. A. Antoniera Vidalón Robles
SECRETARIA GENERAL

Eduardo Cristian Lagos Villavicencio
Ing. EDUARDO CRISTIAN LAGOS VILLAVICENCIO
Gerente Regional de Infraestructura



RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº **428** – 2017 – GRJ/GRI

Huancayo, **17 NOV 2017**

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL

JUNIN

VISTOS:

El Informe Legal N° 1105-2016-GRJ/ORAJ, la Resolución Gerencial General Regional N° 413-2016-GRJ/GRI, Memorando N° 1599-2016-GRJ/SG, y el Informe Técnico N° 121-2017-GRJ/ORAF/ORH/STPAD, y los datos generales del proceso:

Identificación del servidor civil (procesado).

NOMBRE	CARGO	DESDE	HASTA	DIRECCION	RESOLUCION	DNI
Ing. CASTILLO CARDENAS, José Luis	Director Regional de Transportes y Comunicaciones	01/01/2015	CONTINUA	Jr. Libertad N° 1197-El Tambo - Hyo.	RER N° 016- 2015-GR- JUNIN/PR	41171629

CONSIDERANDO:

DE LOS HECHOS:

Que, según se desprende de la Resolución Gerencial General Regional N° 413-2016-GRJ/GGR, de fecha 01 de diciembre de 2016, los cargos imputados en contra del Ing. José Luis Castillo Cárdenas, en su condición de Director Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín, se sustenta en lo siguiente:

“(…) **CONSIDERANDO** (…)

Conforme fluye de los actuados, con fecha 25 de febrero del 2016, el Sr. DENNIS BENJAMIN BACILIO SEGURA –en adelante el administrado-, Gerente General de la Empresa de Transportes BACILIO S.R.L., solicita se le otorgue autorización para prestar el servicio de transporte especial de personas bajo la modalidad de auto colectivo de ámbito regional en la ruta Huancayo – La Oroya y viceversa, asimismo se le otorgue los certificados de habilitación vehicular; (…)

Que, con fecha 25 de octubre del 2016, el administrado advierte que se le reconozca y otorgue su derecho de defensa contemplado en el numeral 14) del artículo 139° de la Constitución, ya que ha sido vulnerado en el procedimiento administrativo seguido en su contra, por presunto incumplimiento del inicio del servicio autorizado, de acuerdo a lo prescrito en numeral 58.3 del artículo 58° y numeral 49.3.8 del artículo 49° del Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, por lo cual en el acto administrativo contenido en la Resolución Directoral Regional N° 679-2016-GRJ-DRTC/DR de fecha 31 de mayo del 2016, que resuelve cancelar su autorización para prestar el servicio de transporte fue emitida sin antes haberse otorgado oportunidad para presentar sus descargos o alegatos, conforme le conoce el numeral 161.2 del artículo 161° de la Ley N° 27444, tampoco se ha respetado la secuencia del procedimiento sancionador como consecuencia de un incumplimiento, reconocidos en los artículos 95° y 103° del mencionado Decreto Supremo. Asimismo indica que la Dirección de Transportes y Comunicaciones, actuó de la manera discriminatoria y dolosa, por cuanto en procedimientos similares ha otorgado oportunidad a los administrados con la finalidad que puedan presentar sus descargos, como ocurre en el caso del Resolución Directoral Regional N° 455-2016-GRJ-

G. R. I.	
REG. N°	2406728
EXP. N°	1195679



DRTC/DR de fecha 15 de abril del 2016, seguido contra la Empresa de Transportes y Turismo PALOTOUR S.C.R.L. que les brinda dicha oportunidad de hacer valer sus derechos de defensa y debido procedimiento. Por tanto solicita la nulidad de Oficio de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 302-2016-GRJ/GRI, de fecha 17 de octubre de 2016; (...)

Que, Revisado el procedimiento administrativo, se logra apreciar que la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, actuó de manera negligente por no haber brindado oportunidad al administrado de poder ejercer su derecho de defensa frente al presunto incumplimiento incurrido, vulnerándose flagrantemente el numeral 161.2 del artículo 161° de la Ley N° 27444, que señala: **"en los procedimientos administrativos sancionadores, o en actos de actos de gravamen para el administrado, se dicta resolución sólo habiéndolo otorgado un plazo perentorio no menor de cinco días para presentar sus alegatos o las correspondientes pruebas de descargo"**, por tanto, para declarar la nulidad de un acto administrativo, previamente, debe otorgarse un plazo perentorio no menor de cinco días al administrado para presentar sus alegatos o las correspondientes pruebas de descargo, éste Criterio que lo entienden también el doctrinario Morín Urbina, al señalar: **"(...) deriva razonablemente del principio del debido procedimiento administrativo y de los Artículos 3.5, 161.2, 187.2 que ninguna autoridad administrativa podrá dictar una anulación, sin otorgar anteladamente audiencia al interesado para que pueda presentar sus argumentos a favor de la sostenibilidad del acto que le reconoce derecho o intereses. Adicionalmente a ello, la resolución anulatoria del acto que le reconoce derecho o intereses. Adicionalmente a ello, la resolución anulatoria debe ser notificada a los administrados concernidos a fin de que tengan la posibilidad de controlar su legalidad."**; por lo tanto queda claramente establecido que antes de dictarse un acto administrativo que cause agravio al administrado, previamente debe otorgársele oportunidad para que pueda hacer valer su derecho de defensa mediante la presentación de descargos o alegatos, tal omisión vulneraría el Derecho de Defensa y Debido Procedimiento.



En ese mismo sentido de autos se logra apreciar que la Resolución Directoral Regional N° 679-2016-GRJ-DRTC/DR de fecha 31 de mayo del 2016, resuelve cancelar la autorización otorgada al administrado, por haber incumplido lo prescrito por el numeral 49.3.8 del artículo 49 y el numeral 58.3 del artículo 58° y del Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, las mismas que se encuentran relacionadas a la demora en el inicio de operaciones por lo tanto constituyéndose una causa de cancelación. Sin embargo previa a la cancelación, como causal de incumplimiento debió tenerse en cuenta lo prescrito por el artículo 95° del mismo cuerpo normativo, que señala: **"El incumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia es de una sola clase y determina la sanción que corresponda, como consecuencia de un procedimiento administrativo sancionador."**; en concordancia con lo prescrito por el numeral 96.1 del artículo 96° del referido Decreto Supremo, que luego de interpretación sistemática se logra entender que previamente a una sanción se requiere de un procedimiento administrativo sancionador, otorgándose un plazo para que el administrado pueda subsanar la omisión cometida o corregir el incumplimiento. Conforme regula el numeral 103.1 artículo 103° del mismo cuerpo legal, sin que se le pueda eximir de la responsabilidad administrativa cometida. (...)

Que, sin perjuicio de lo mencionado precedentemente se evidencia que se ha incurrido en el supuesto de nulidad previsto en el numeral 2) del Artículo 10° de la Ley N° 27444, al haberse observado que existen vicios que causan su nulidad de pleno derecho, conforme se desarrolla en los numerales 202.1 y 202.2 del artículo 202° de la Ley N° 27444, que establece, en cualquiera de los casos enumerados en el referido artículo 10°, se producen los vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho, siendo los siguientes: **"1).- La contravención a la Constitución, a las leyes o a las norma reglamentarias; 2.- El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez (...)"**, por lo tanto resulta necesario remitirnos a los regulados por el artículo 3° de la misma Ley, establece que son requisitos de validez de los actos administrativos, la competencia, el objeto o contenido, la finalidad pública, motivación, procedimiento regular. Entendiéndose que antes de la emisión del acto administrativo, se debió cumplir con todas las acciones que requiere el procedimiento administrativo, previo para su generación, hecho que ha sido vulnerado al no haberse



respetado el derecho de defensa y debido procedimiento, por lo tanto debe declararse la nulidad de oficio de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 293 (302)-2016-GRJ/GRI de fecha 11 (17) de octubre del 2016, Resolución Directoral Regional N° 680 679)-2016-GRJ-DRTC/DR de fecha 31 de mayo del 2016 y todo lo actuado, hasta la etapa que se le notifique oportunamente los cargos que se le imputan que dará inicio del procedimiento administrativo sancionador.(...)

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- declarar **LA NULIDAD DE OFICIO** de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 302-2016-GRJ/GRI de fecha 17 de octubre del 2016 y la Resolución Directoral Regional N° 679-2016-GRJ-DRTC/DR de fecha 31 de mayo del 2016, al haberse observado que existen vicios que causan su nulidad de pleno derecho, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa del a presente.

ARTÍCULO SEGUNDO.- RETROTRAER el procedimiento administrativo hasta la etapa procedimental, donde el Órgano competente de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, notifique las imputaciones encontradas en contra de la Empresa de Transportes BACILIO S.R.L., y se dé inicio al procedimiento administrativo sancionador en su contra, conforme las normas citadas en la parte considerativa del presente.

ARTÍCULO TERCERO.- REMÍTASE copias de los actuados a la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del GRJ y a la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Dirección Regional de Transportes, para el deslinde de responsabilidades del funcionario y/o servidor implicado, en la emisión de la Resolución Directoral Regional N° 680 (679)-2016-GRJ-DRTC/DR de fecha 31 de mayo del 2016, generando responsabilidad administrativa, conforme se encuentra prescrito por el numeral 12.3 del artículo 12° de la Ley N° 27444. (...)"

DE LOS ANTECEDENTES:

De los antecedentes y documentos que dieron origen al inicio del proceso:

Que, conforme se desprende de la Resolución Gerencial General Regional N° 413-2016-GRJ/GGR, de fecha 01 de diciembre de 2016, en el tercer artículo de la parte resolutive, señala: "**ARTÍCULO TERCERO.- REMÍTASE** copias de los actuados a la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del GRJ y a la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Dirección Regional de Transportes, para el deslinde de responsabilidades del funcionario y/o servidor implicado, en la emisión de la Resolución Directoral Regional N° 680 (679)-2016-GRJ-DRTC/DR de fecha 31 de mayo del 2016, generando responsabilidad administrativa, conforme se encuentra prescrito por el numeral 12.3 del artículo 12° de la Ley N° 27444. (...)"

Análisis de los documentos y medios probatorios que sirven de sustento para la toma de decisión:

La Resolución Directoral Regional N° 258-2016-GRJ-DRTC/DR, de fecha 14 de marzo de 2016, en la cual se resuelve declarar procedente el otorgamiento de la autorización para prestar servicios de transporte especial de personas en auto colectivo – Ámbito Regional, Huancayo-La Oroya y viceversa, solicitado por la Empresa de Transportes BACILIO S.R.L., en cuanto al vehículo de placa nacional de Rodaje No. W3R-967(2015 Categoría M2 Clase III. (fs. 139-143).

La Resolución Directoral Regional N° 679-2016-GRJ-DRTC/DR, de fecha 31 de mayo de 2016, en la cual se dispone la cancelación de la Resolución Directoral Regional N° 0258-2016-GRJ-DRTC/DR de fecha 14 de marzo de 2016. (fs. 209-210)





El **Recurso de apelación**, de fecha 14 de setiembre de 2016, interpuesto por Dennis Benjamín Bacilio Segura, representante de la Empresa de Transportes BACILIO S.R.L., contra lo resuelto en la resolución antes aludida. (fs. 2313-221).

La **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 302-2016-GRJ/GRI**, de fecha 17 de Octubre de 2016, en la cual se resuelve declarar improcedente el recurso antes aludido, por haberse interpuesto de manera extemporánea. (fs. 227-228).

TIPIFICACION DE LA FALTA:

Se debe tener en cuenta; que en materia sancionadora el **principio de legalidad** impide que se pueda atribuir la comisión de una falta si ésta no está previamente determinada en la ley, y también prohíbe que se pueda aplicar una sanción si ésta no está determinada por la ley. Como lo ha expresado el Tribunal Constitucional (Cfr. Expediente N.° 010-2002-AI/TC), este principio impone tres exigencias: la existencia de una ley (*lex scripta*), que la ley sea anterior al hecho sancionado (*lex praevia*), y que la ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado (*lex certa*).

Los PAD instaurados desde el 14 de septiembre de 2014, por los hechos cometidos a partir de dicha fecha, se regirán por las normas procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario previstas en la Ley N° 300057 y su Reglamento.

Que sobre los hechos imputados al involucrado, constituiría faltas de carácter administrativo; que no es más ***“Toda acción u omisión voluntaria o no que contravengan las obligaciones, prohibiciones y demás normas sobre los deberes de funcionarios y servidores”***; en el presente caso, se habría vulnerado el artículo 85, letra a), d) y q) - Ley 30057 - Ley de Servicio Civil, que prescribe:

Artículo 85, letras a), d) y q) - Ley 30057-Ley de Servicio Civil	Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo: a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley su Reglamento, d) La negligencia en el desempeño de las funciones, y q) Las demás que señale la ley”.
--	--

Norma que resulta concordante con lo establecido para el caso, en el acápite 98.3 del art. 98° del Reglamento de la Ley N°30057, aprobado por D.S. N° 040-2014-PC, que prescribe: 98.3. *La falta por omisión consiste en la ausencia de una acción que el servidor o ex servidor civil tenía obligación de realizar y que estaba en condiciones de hacerlo.*

Esto al haber transgredido:

La Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
 - 1.1. *Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.*
 - 1.2. *Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. (...)*
 - 1.11. *Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus*



decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

Artículo 10.- "Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La Contravención a la Constitución, la las leyes o a las normas reglamentarias".

Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad

11.3 La resolución que declara la nulidad, además dispondrá lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido.

Artículo 12.- Efectos de la declaración de nulidad

12.3 En caso de que el acto viciado se hubiera consumado, o bien sea imposible retrotraer sus efectos, sólo dará lugar a la responsabilidad de quien dictó el acto y en su caso, a la indemnización para el afectado.

Artículo 75.- Deberes de las autoridades en los procedimientos

Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes: (...)

1. Actuar dentro del ámbito de su competencia y conforme a los fines para los que les fueron conferidas sus atribuciones.

2. Desempeñar sus funciones siguiendo los principios del procedimiento administrativo previstos en el Título Preliminar de esta Ley. (...)

Artículo 234.- Caracteres del procedimiento sancionador Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por: (...)

3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo la calificación de las infracciones que tales hechos pueden construir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia. (...).

Artículo 235.- Procedimiento sancionador

Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las siguientes disposiciones:

3. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento formula la respectiva notificación de cargo al posible sancionado, la que debe contener los datos a que se refiere el numeral 3 del artículo precedente para que presente sus descargos por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles contados a partir de la fecha de notificación.

Artículo 239.- Faltas Administrativas (...)

Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su régimen laboral o contractual, incurrir en falta administrativa en el trámite de los procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados administrativamente con amonestación, suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con que hayan actuado, en caso de: (...)

4. Resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia.

Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín (ROF)

ARTÍCULO 85o.- Naturaleza y funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (...) Tiene las funciones siguientes:

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de transportes de la región, de conformidad con las políticas nacionales y los planes sectoriales.





Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (ROF)

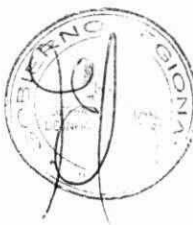
ARTÍCULO 12o.- (...) Son funciones del Director Regional: (...)

- b) *Dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento de los órganos de la Dirección Regional.*
(...)
- f) *Resolver en primera instancia administrativa los asuntos de su competencia.* (...)

Los hechos investigados, se rigen por las reglas procedimentales previstas en la Ley 30057, Ley de Servicio Civil (LSC), por cuanto el Proceso Administrativo Disciplinario (PAD), se ha instaurado después del 14 de setiembre de 2014, fecha en que ha entrado en vigencia ésta ley.

El Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley 30057, permite al Secretario Técnico (ST), investigar de oficio cuando existan indicios razonables sobre la comisión de una falta.

SUBSUNCION DE LOS HECHOS A LA NORMA.-



En la Sentencia N.º 090-2004-AA/TC, el Tribunal ha expresado que: "(...) el deber de motivar las decisiones administrativas alcanza especial relevancia cuando en las mismas se contienen sanciones". En la medida que una sanción administrativa supone la afectación de derechos, su motivación no sólo constituye una obligación legal impuesta a la Administración, sino también un derecho del administrado, a efectos de que éste pueda hacer valer los recursos de impugnación que la legislación prevea, cuestionando o respondiendo las imputaciones que deben aparecer con claridad y precisión en el acto administrativo sancionador. De otro lado, tratándose de un acto de esta naturaleza, la motivación permite a la Administración poner en evidencia que su actuación no es arbitraria sino que está sustentada en la aplicación racional y razonable del derecho y su sistema de fuentes.

Para mejor resolver los hechos imputados se debe tener en cuenta.-

La STC N° 0090-2004-AA/TC, emitida por el Tribunal Constitucional; en cuanto al interés público, donde se ha reconocido que se trata de un concepto jurídico con contenido y extensión variable en atención a las circunstancias, que es concreta y específica cuando la administración actúa en el campo de sus potestades, teniendo como requisito sine qua non «condición sin la cual no» la motivación de sus decisiones, quedando excluida toda posibilidad de arbitrariedad, puesto que la administración está obligada a justificar las razones que imponen determinada decisión, de una manera concreta y específica; por ello, conviene citar al tratadista Juan Carlos Morón Urbina que sostiene: *"Si como se sabe la Administración está sujeta al principio de legalidad, y ello constituye antecedente necesario para cualquier interés público de su actuación, no se podría entender como un acto reconocidamente inválido, no podrá nunca satisfacer el interés que anima a la Administración. Por ello que la posibilidad de la anulación de oficio implica en verdad una vía para la restitución de la legalidad afectada por un acto administrativo"*

Compulsación de la prueba:

Que, haciendo un análisis lógico jurídico de la precalificación de los hechos y los medios de prueba incorporados válidamente al expediente administrativo, la falta disciplinaria imputable al administrado **Ing. José Luis Castillo Cárdenas**, en su condición de Director Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional Junín; sería por presunta irregularidad administrativa por acción y omisión en el ejercicio de sus



funciones; por cuanto, al haber emitido la Resolución Directoral Regional N° 679-2016-GRJ-DRTC/DR, de fecha 31 de mayo de 2016, que resuelve cancelar la autorización otorgada a favor de la Empresa de Transportes BACILIO S.R.L. para prestar servicio especial de transportes de pasajeros Ámbito Regional, lo hizo sin las garantías de un debido procedimiento, que exige el inciso 3 del artículo 234, e inciso 3 del artículo 235, ambos de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, esto en relación al ordenamiento del procedimiento sancionador; por ende, inicialmente se debió haber notificado al representante de ésta empresa los cargos que se le imputa, a fin de garantizarse su derecho de defensa, lo que no se hizo; situación que ha conllevado a que se lesione el orden jurídico, con ello, el Principio de Legalidad. Por lo tanto, a través de la Resolución Gerencial General Regional N° 413-2016-GRJ/GGR, de fecha 01 de diciembre de 2016, se ha resuelto declarar la nulidad de oficio de ésta resolución que es materia de cuestionamiento.

Por consiguiente, de haber actuado en forma diligente respetándose las garantías de un debido procedimiento, no se habría producido estos actos omisivos; que por el grado de jerarquía en relación a la falta cometida, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente; por ende, no ha salvaguardado los derechos e intereses de la Entidad, para así, los recursos públicos sean empleados austeramente; generándose con estos actos grave retraso institucional, al crearse suspicacias a una mala imagen a la Entidad y sus representantes. Situación que conllevaría a materializarse la comisión de las faltas descritas y la responsabilidad de éste imputado.

Posible sanción a la falta imputada.

Consecuentemente, estando a lo antes colegido; el administrado Ing. José Luís Castillo Cárdenas, como Director Regional de Transportes y Comunicaciones; si bien es cierto, su responsabilidad tendría sustento a la grave afectación a los bienes jurídicos protegidos por el Estado; como también por la función que desempeña en la Entidad, mayor sería su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente; sin embargo, por la forma, modo y circunstancias, de cómo se suscitaron los hechos imputados, y no apreciándose con exactitud la magnitud de los daños y perjuicios a la Entidad; la posible sanción a imponérsele sería **suspensión sin goce de remuneraciones**, conforme a lo establecido en los incisos a) y c) del artículo 87, e inciso b) del artículo 88°, ambos de la Ley N° 30057-Ley de Servicio Civil; y artículo 92° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM concordante con el artículo 230° inciso 3 de la del Procedimiento Administrativo General.

ORGANO INSTRUCTOR COMPETENTE:

Que, el Órgano Instructor Competente para disponer el Inicio del PAD; es el Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Junín.

PLAZO DE PRESENTACION DE DESCARGO:

Que, conforme al literal a) del artículo 106° y 111° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, el plazo para que los procesados presenten sus descargos en el proceso se deberá brindar a los procesados el plazo de cinco (5) días hábiles para que presenten sus descargos escritos ante el Órgano Instructor. Dicho plazo se computa desde el día siguiente de la comunicación que determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Asimismo, dicho plazo que puede ser prorrogable debiendo ser justificable.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PROCESADO:



Que, conforme al Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, son derechos y obligaciones de los servidores, los siguientes:

“Artículo 96.1. Mientras esté sometido a procedimiento administrativo disciplinario, el servidor civil tiene derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva y al goce de sus compensaciones. El servidor civil puede ser representado por abogado y acceder al expediente administrativo en cualquiera de las etapas del procedimiento administrativo disciplinario.

Artículo 96.2. Mientras dure dicho procedimiento no se concederá licencias por interés del servidor civil, a que se refiere el literal h) del Artículo 153 del Reglamento mayores a cinco (05) días hábiles.

Artículo 96.3. Cuando una entidad no cumpla con emitir el informe al que se refiere el segundo párrafo de la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley del Servicio Civil en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, la autoridad competente formulará denuncia sin contar con dicho informe.

Artículo 96.4. En los casos en que la presunta comisión de una falta se derive de un informe de control, las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario son competentes en tanto la Contraloría General de la República no notifique la Resolución que determina el inicio del procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa funcional, con el fin de respetar los principios de competencia y non bis in idem.”;

Que, estando a lo recomendado por la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Junín y **estando a lo dispuesto por esta Gerencia Regional de Infraestructura**, y; en uso de las facultades y atribuciones otorgadas por la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria mediante Ley N° 27902, concordante con la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; y demás normas conexas;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APERTURAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO contra el siguiente servidor:

- ✓ **Ing. JOSE LUIS CASTILLO CARDENAS**, como Director Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional Junín, por haber incurrido en presuntas faltas administrativas, conforme lo establece Artículo 85° de la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, precisados en los literales: **a) El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Ley y su reglamento; d) La negligencia en el desempeño de las funciones; y, q) las demás que señale la ley.**

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el presente acto administrativo al servidor comprendido en el procedimiento que se está instaurando, otorgándoles el plazo que señala el artículo 106° y 111° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM – Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, a fin de que efectúe los descargos que estime conveniente, garantizando así el derecho de defensa y el debido procedimiento.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR al Área de notificaciones el diligenciamiento de la presente Resolución, conforme a la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria mediante Decreto Legislativo N° 1029.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


Ing. EDUARDO CRISTIAN LAGOS VILLAVICENCIO
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 27 NOV 2017


Abog. A. Antonieta Vidalón Robles
SECRETARIA GENERAL